



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 31 de marzo de 2026

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Scaliter, Paula Sara c/ Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación UNESCO s/ despido”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó la excepción de incompetencia por inmunidad de jurisdicción opuesta por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación UNESCO (IPE) frente a la demanda de la actora tendiente al cobro de indemnizaciones y multas por fraude a la legislación laboral nacional, en la que invoca la naturaleza dependiente de los servicios que prestó para el demandado, durante diecisiete años y en el marco de sucesivos contratos a plazo fijo.

2º) Que para así resolver el *a quo* sostuvo, con cita de la doctrina de Fallos: 322:1905, que el principio de limitación al juzgamiento compulsivo de las organizaciones internacionales no debe extenderse a entes como el aquí demandado, a los cuales no resultan aplicables las directrices de la ley 24.488. Añadió que, a diferencia de lo que ocurre con los estados soberanos, la limitación enunciada no tiene fundamento en el derecho de gentes sino en la voluntad común de los estados parte del Tratado Constitutivo y, por ello, la entidad goza de dicho privilegio con el alcance definido en el instrumento internacional de creación o, con relación al Estado receptor, en el respectivo acuerdo de sede. Sentado lo expuesto ponderó que, en el caso, la inmunidad de jurisdicción establecida en los artículos III, Sección 4, de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, y VI, inciso 3, del Acuerdo General de Sede suscripto entre la República Argentina y la UNESCO el 3 de diciembre de 1996, reconoce una excepción en el artículo VI, inciso 5 de

este último, al disponer que “Además de sus funcionarios y de sus expertos, la Organización podrá requerir localmente los servicios de otras personas; argentinos o extranjeros residentes en la República Argentina mediante contratos de trabajo que se sujetarán a la legislación laboral y de seguridad social argentina, y los conflictos a que den lugar serán resueltos por la jurisdicción local competente”. Sobre esa base, y lo dictaminado en análogo sentido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en calidad de *amicus curiae*, entendió que la referida cláusula contiene una renuncia tácita a la inmunidad de jurisdicción del organismo. En consecuencia, resolvió que el fuero laboral resultaba competente para conocer en el caso. Añadió que tal conclusión no implicaba adelantar la solución final de la contienda ni la decisión a dictarse respecto de la naturaleza jurídica del vínculo habido entre las partes, cuestiones que excedían el acotado marco del debate propuesto y deberían, en consecuencia, examinarse al momento del dictado de la sentencia definitiva, sin perjuicio de los eventuales planteos que pudieran formularse en relación con otras inmunidades.

3º) Que contra esa decisión el demandado dedujo el recurso extraordinario que, denegado, motivó esta queja. En su memorial, el recurrente aduce que la sentencia apelada es equiparable a definitiva, pues priva de inmunidad de jurisdicción a un organismo internacional. Sostiene que la decisión entraña una cuestión federal, ya que la cámara interpretó equivocadamente los artículos VI del Acuerdo General de Sede suscripto con la UNESCO y III de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, entre otros. Manifiesta que los contratos celebrados con la actora no se sustentaron en las normas laborales argentinas, requisito necesario para que operara la excepción a la inmunidad. Dichos instrumentos,



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

además, prevén un mecanismo específico de resolución de conflictos. Se añade a ello que la demandante nunca integró la planta de personal dependiente o de funcionarios del instituto y sus tareas excedieron el ámbito local. Estima vulnerados los artículos 27, 31, 33 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y desoída la doctrina de Fallos: 322:1905.

4°) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que la resolución impugnada es equiparable, por sus efectos, a una sentencia definitiva en la medida en que, por aplicación del artículo VI, inciso 5 del Acuerdo de Sede, ha desconocido al IIPE la invocada inmunidad de jurisdicción (reglada en el artículo III, Sección 4 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas). La solución impugnada resulta, asimismo, contraria al derecho que el recurrente fundó en dichas normas federales (confr. artículo 14, inciso 3°, ley 48).

5°) Que es criterio reiterado de esta Corte que, a los fines de dilucidar cuestiones de competencia, debe tomarse en consideración, de modo principal, la exposición de los hechos contenida en la demanda y después, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como también a la naturaleza jurídica de la relación existente entre los contendientes (doctrina de Fallos: 344:3613; 345:582; 345:800, entre muchos otros). En ese marco cabe observar que, en el escrito de inicio, la actora invocó el carácter laboral de la relación que mantuvo con el demandado durante 17 años y que se instrumentó mediante sucesivos contratos de trabajo a plazo fijo. De la descripción de las tareas asignadas a la actora allí contenida, así como de la modalidad contractual (contratos renovados cada seis meses), se desprende que no habría sido una funcionaria o una experta del instituto demandado sino que, por el contrario, sus servicios habrían sido

requeridos localmente. Por consiguiente, resulta *prima facie* aplicable el artículo VI, inciso 5 del Acuerdo de Sede que contempla la excepción a la inmunidad de jurisdicción reglada en el artículo 3, Sección 4 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades.

6°) Que, en tales condiciones, habida cuenta de la entidad de los derechos en juego y a fin de resguardar apropiadamente la garantía de acceso a la jurisdicción de la actora, resulta justificado que, en este estadio del pleito y en el acotado marco de resolución de la excepción opuesta por la demandada, se mantenga la competencia de los tribunales intervinientes. Tal conclusión no implica anticipar opinión acerca de la solución que, en definitiva, corresponda adoptar respecto del reclamo de fondo ni, particularmente, sobre el carácter de la contratación habida entre las partes.

Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario, y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Remítase la queja junto al principal. Notifíquese y cúmplase.



CNT 4363/2018/1/RH1  
Scaliter, Paula Sara c/ Instituto  
Internacional de Planeamiento de la  
Educación UNESCO s/ despido.

## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Recurso de queja interpuesto por **Pablo Cevallos Estarellas, Director de la Oficina Regional para América Latina del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación UNESCO**, demandado en autos, representado por el **Dr. Hernán Ariel Colli**.

Tribunal de origen: **Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo**.

Tribunal que intervino con anterioridad: **Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 68**.